

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	EJECUTIVO LABORAL
DEMANDANTE	MARÍA OTILIA RÍOS DE LÓPEZ
DEMANDADO	MARÍA ORFA HENAO ARROYAVE
PROCEDENCIA	JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CTO. DE MEDELLÍN
RADICADO	05001-31-05-003-2011-00390-01
SEGUNDA INSTANCIA	APELACIÓN EJECUTADA
Temas y subtemas	AUTO QUE ACTUALIZA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO – Art. 446 CGP
DECISIÓN	REVOCA

AUTO INTERLOCUTORIO No.020

Medellín, veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

En atención a lo previsto en el decreto 806 de 2020 convertido en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado el presente asunto en la SALA QUINTA DE DECISION LABORAL, según consta en Acta N°061 de 2022, se procede a dictar AUTO INTERLOCUTORIO en orden a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la **PARTE DEMANDADA**, contra Auto Interlocutorio del 6 de abril de 2022, proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín.

ANTECEDENTES

Mediante solicitud de ejecutivo a continuación de ordinario, la señora **MARÍA OTILIA RÍOS DE LÓPEZ**, con sustento en lo decidido en la Sentencia N° 050 del 28 de mayo de 2009 emitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral Rad. 003-2006-00392, confirmada por la Sala Segunda de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín en decisión del 27 de septiembre de 2010, deprecó: 1) Se libre mandamiento ejecutivo de pago en contra de **MARÍA ORFA HENAO ARROYAVE** por las siguientes sumas (Archivo 036 Expediente):

- Por concepto de incapacidad, cesantías, sanción e intereses a las cesantías. \$1.792.741,05
- Por concepto de indemnización moratoria a razón de \$10.000 diarios, causados desde el 7 de febrero de 2006 hasta el 11 de enero de 2011, y lo que se siga causando hasta el pago de la obligación, la suma de \$19.282.741
- Por la suma \$3.374.480 correspondiente a agencias en derecho.
- Por un monto de \$3.000.000 de las costas procesales.

ACTUACIÓN PROCESAL

A través de Auto del 14 de abril de 2011, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín dispuso librar mandamiento de pago en contra de **MARÍA ORFA HENAO ARROYAVE** por los siguientes valores (Archivo 038 Expediente):

- \$1.792.741,05 adeudada por concepto de incapacidad, cesantías, sanción e intereses a las cesantías.
- \$19.282.741 por concepto de indemnización moratoria a razón de \$10.000 causados desde el 7 de febrero de 2006 hasta el 11 de enero de 2011.
- \$3.377.780 como costas del proceso ordinario.
- \$10.000 diarios desde el 12 de enero de 2011 hasta que se produzca el pago de las prestaciones sociales.

Posteriormente, previa notificación de la parte ejecutada, a través de Auto del 13 de febrero de 2013, el Juzgado de primera instancia dispuso seguir adelante con la ejecución, **requiriendo a las partes para que presentaran la liquidación del crédito** (f. 3 Archivo 061 Expediente).

Que la PARTE EJECUTANTE presentó liquidación del crédito a corte del **11 de marzo de 2013** por un valor total de \$31.943.262,05, cálculo que, previo traslado a la PARTE EJECUTADA, resultó **aprobada en Auto del 7 de junio de 2013**, decisión en la cual se fijaron como agencias en derecho del ejecutivo la suma de \$1.597.163,10 (Archivos 062 y 063 Expediente).

Posteriormente, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Medellín dejó a disposición del Juzgado de primera instancia dineros embargados a la demandada, a instancias de otro proceso, constituidos en depósitos del 17 de junio de 2014, pagados a la demandante

según órdenes del 18 de julio de 2014, por valor total de \$26.735.753 (Archivo 069 Expediente).

Luego, el **27 de septiembre de 2018** el extremo EJECUTADO presentó liquidación del crédito en la que, teniendo en cuenta los abonos descritos, arrojó como saldo adeudado la suma de \$4.696.502, misma que, previo traslado a la contraparte, fue **aprobada en Auto del 8 de noviembre de 2018**, fijándose como agencias la suma de \$1.597.163 (Archivo 078 a 080 Expediente).

Más adelante, por parte de los Juzgados Cuarto y Octavo Civiles Municipales de Ejecución de Medellín, se dejaron a disposición del presente proceso, depósitos judiciales por valor total de \$1.921.151 (Archivo 080 ED).

PROVIDENCIA RECURRIDA

Mediante **Auto del 6 de abril de 2022**, el Juzgado de primer grado, **oficiosamente**, procedió a actualizar la liquidación del crédito a corte de esa calenda, algoritmo en el que concluyó que a la fecha lo adeudado correspondía a los siguientes valores (Archivo 21 ED):

Atendiendo a las consideraciones anteriores, este Despacho procede a actualizar la liquidación del crédito, a partir del 26 de septiembre de 2018 hasta el día de hoy, 6 de abril de 2022, así.

Sanción moratoria a partir del 27 de septiembre de 2018 hasta el 6 de abril de 2022, a razón de \$10.000.00 diarios.....			\$ 12.700.000.00
Saldo Adeudado.....			\$ 4.696.502.00
Total.....			\$ 17.396.502.00
Menos	Abono	títulos	
pendientes.....			\$ 1.921.151.00

GRAN TOTAL.....\$ 15.475.351.00

Total Crédito: **Quince Millones Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Un Pesos (\$15.475.351.00).**

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado judicial de la **DEMANDADA** interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, alegando, primero, estar inconforme con la forma de proceder el Juzgado, como quiera que, para actualizar la liquidación del crédito, aquel debía agotar el procedimiento establecido en el numeral 4° del artículo 446 CGP, mismo que no aplicó el Funcionario.

Indicó que en respuesta anterior remitida desde el Juzgado Tercero Laboral del Circuito con destino al Juzgado Cuarto Civil de Ejecución de Medellín se dijo que la liquidación era de \$4.696.502, suma a la que, restados los depósitos enviados por dicha dependencia en la suma de \$1.921.151, arrojan un saldo pendiente de \$2.755.351. A esto último añadió que en junio de 2021 el Juzgado Octavo de Ejecución Civil solicitó informar lo adeudado para efectuar la conversión de otros depósitos, petición frente a la cual guardó silencio, procediendo, después de muchos meses, a actualizar la liquidación del crédito, pasando por alto que en los demás Juzgados había remanentes suficientes para cubrir las sumas en deuda.

En ese sentido, expuso que con su actuar, el Juzgado está beneficiando a la demandante, quien no ha estado pendiente del proceso, sin dar impulso al mismo. De igual forma, insistió en que, pese a los requerimientos efectuados por los Juzgados Civiles de Ejecución, y por la misma ejecutada, el Juez de primer grado hizo caso omiso, incurriendo en irregularidades en relación con la dirección del proceso.

En consecuencia, solicitó que se deje sin efectos la liquidación actualizada en la providencia recurrida, y, se tenga en cuenta la liquidación aprobada el 26 de septiembre de 2018 (Archivo 20 ED).

En providencia del 4 de mayo de 2022, el *A quo* resolvió la reposición de manera negativa, tras precisar que no podía modificar la liquidación, como quiera que, a la fecha la sanción moratoria reglada en el artículo 65 CST se sigue causando, conforme lo dispuesto en el mandamiento de pago; y, en consecuencia, procedió a conceder la alzada (Archivo 21 ED).

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro de la oportunidad concedida, el mandatario de la demandada alegó exponiendo idénticos argumentos a los que sirvieron de sustento al recurso de apelación. (Archivo 06 ED).

PROBLEMA A RESOLVER

Determinar si en el presente asunto hay lugar a dejar sin efectos la actualización de la liquidación del crédito efectuada por el Juzgado, o, por el contrario, le asiste razón al Despacho de primer grado.

CONSIDERACIONES

Es competente esta Corporación para conocer de la alzada propuesta, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 65 CPLSS. En ese sentido, la Sala resolverá el recurso siguiendo los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPL, es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

De acuerdo con los límites de la alzada, nótese que, la estructura de la apelación, en principio da a entender que, en esencia, la discusión trazada a partir de esta se cierra exclusivamente a las cifras arrojadas por el cálculo del Despacho; sin embargo, no siendo un dato menor, al inicio de su intervención, la recurrente expuso que el Juzgado efectuó la operación de lo adeudado sin acudir a lo presupuestado en la norma procesal que rige tal actuación.

En efecto, en lo concerniente a la liquidación del crédito dentro del trámite ejecutivo laboral, que valga anotar, se acude por remisión del artículo 145 CPLSS, al procedimiento reglado en el CGP, se encuentra que el artículo 446 establece lo siguiente:

*“(...) **Liquidación del crédito y las costas.** Para la liquidación del crédito y las costas, se observarán las siguientes reglas:*

1. Ejecutoriada el auto que ordene seguir adelante la ejecución, o notificada la sentencia que resuelva sobre las excepciones siempre que no sea totalmente favorable al ejecutado cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación, y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquel y de estos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento ejecutivo, adjuntando los documentos que la sustenten, si fueren necesarios.

2. De la liquidación presentada se dará traslado a la otra parte en la forma prevista en el artículo 110, por el término de tres (3) días, dentro del cual sólo podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo trámite deberá acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se precisen los errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada.

3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto que solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva. El recurso, que se tramitará en el efecto diferido, no impedirá efectuar el remate de bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de apelación.

4. De la misma manera se procederá cuando se trate de actualizar la liquidación en los casos previstos en la ley, para lo cual se tomará como base la liquidación que esté en firme. (...)” (Subraya de la Sala).

Destáquese entonces que, tanto la liquidación como la actualización del crédito son, primordialmente, **un acto procesal cuyo impulso se atribuye a las partes**, sujeto a un trámite específico que no busca nada distinto a obtener la participación bilateral de los contendientes en lo referente a determinación de la cuantía de lo adeudado desde la posición de cada uno; escenario en el que la participación del Juez se limita a aprobarla o modificarla, resaltando con esta última que, en el evento de advertir que el cálculo presentado no sea correcto, es su deber realizar el control de legalidad, y ajustarla a los parámetros reales, consultando la obligación consignada en la sentencia base de recaudo.

En concordancia con lo anterior, es menester indicar que, tampoco la actualización del crédito procede en cualquier momento, o cuando las partes o el Juez lo dispongan, pues la misma codificación condiciona, que esto sucederá en los “*casos previstos en la ley*”, oportunidades que, al revisar la norma objetiva, son tres (3) básicamente: **1)** Cuando se produce el remate de los bienes embargados y secuestrados, a fin de entregar el producto del remate. **2)** Cuando el demandado pretende pagar la obligación, según lo establecido en el artículo 461 CGP, y, **3)** Cuando se recauda dinero por embargos,

suficientes o no para cancelar la liquidación inicial que se encuentre en firme.

Bajo el panorama descrito, en el particular no se desconoce que, desde el Auto del 8 de noviembre de 2018, el Juzgado de primer grado aprobó la liquidación del crédito presentada por la parte accionada, restando a ese momento, un valor insoluto de \$4.696.502 en favor de la ejecutante (Archivo 078 a 080 Expediente); y que, con posterioridad a ello, producto de las medidas decretadas fueron dejados a disposición de este proceso varios depósitos judiciales, provenientes de los Juzgados Cuarto y Octavo Civiles Municipales de Ejecución de Medellín, circunstancia que encuadra dentro de los casos que hacen procedente la revisión del crédito a efectos de actualizar el importe de la obligación, a fin de verificar si con lo abonado se satisface el total de la deuda, o el nuevo monto del pasivo.

Ante esa situación, para la Sala lo propio era agotar el trámite establecido en la normativa en cita, esto es, que, a instancias de cualquiera de las partes se presentase la liquidación actualizada (aun cuando mediare requerimiento previo para que lo hicieren), corriéndose el debido traslado a la contraparte, y una vez acaecido lo anterior, se procediera por el Juzgado a decidir sobre el asunto; en modo alguno había lugar por el despacho a asumir la liquidación del crédito directamente, obviando las formas o etapas preestablecidas en la norma procesal, llegando al punto de prescindir incluso de dar traslado a la parte ejecutante, como si la disposición legal diera lugar a ello, recordándose que por su carácter adjetivo, este procedimiento es de orden público, y por ende, de obligatorio cumplimiento.

De hecho, valga recordar que el mismo ordenamiento procedimental le otorga tanta relevancia al actuar de la parte en esta instancia del trámite ejecutivo, que castiga su inactividad, por ejemplo, con la figura del desistimiento tácito, según lo dispuesto en el literal B del numeral 2° del artículo 317 CGP.

Tal desatención, si bien no configura una de las causales de nulidad enlistadas en el artículo 133 CGP, si denotan una falta al debido proceso (Art. 29 CGP), irregularidad por la que debe acudir a lo dispuesto en el parágrafo del mentado artículo que establece: “(...) *Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece. (...)*”, como quiera que, al evidenciarse la falencia procesal anotada, y siendo impugnada por uno de los interesados, como lo es la parte ejecutada, mal haría esta Judicatura en desechar tales argumentos, razón por la cual debe propenderse por enderezar la anomalía procesal evidenciada, pues se itera, incluso a la fecha se discute el monto del crédito adeudado a espaldas de la parte contraria (demandante), lo cual va en contravía del reglamento, que precisamente propende por el traslado de las liquidaciones que se llegaren a radicar.

Por consiguiente, habrá de revocarse el Auto Interlocutorio del 6 de abril de 2022, ordenando a esa dependencia que, respecto de la actualización de la liquidación del crédito, proceda conforme lo establecido en el artículo 446 CGP; sin costas en esta instancia por no aparecer causadas.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN,**

RESUELVE

REVOCAR el Auto Interlocutorio del 6 de abril de 2022 proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, para disponer en su lugar

PRIMERO: ORDENAR al Juzgado en comento que, respecto de la actualización de la liquidación del crédito, proceda conforme lo establecido en el artículo 446 CGP.

SEGUNDO: Sin **COSTAS** en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,


MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA
Magistrada


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –
SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 216 del 30
de noviembre de 2022

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>